



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Dictamen Jurídico**

**Número:**

**Referencia:** EX-2018-00647608-APN-SIGEN - Renegociación Acuerdo Integral - Concesión Acceso Norte (Ausol S.A.)

---

**A LA PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN:**

Reingresan las presentes actuaciones en los términos del artículo 7º, inciso d), de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549, por las cuales tramita un proyecto de acuerdo de renegociación contractual del Contrato de Concesión del Acceso Norte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a suscribirse por el Estado Nacional y Autopistas del Sol Sociedad Anónima.

**CAPÍTULO I – ANTECEDENTES**

Al respecto, cabe señalar que este servicio jurídico tuvo oportunidad de reseñar antecedentes y expedirse oportunamente en las presentes actuaciones mediante el Dictamen Jurídico N° IF-2018-14202456-APN-DGAJ#MTR del 4 de abril de 2018, obrante al orden 48, al que cabe remitirse en honor a la brevedad.

Entre los antecedentes obrantes en el expediente de la referencia, posteriores a la intervención de este servicio jurídico, se destacan los siguientes:

1. En el orden 59 obra la Nota N° NO-2018-17168733-APN-DACLYT#MHA del 18 de abril del 2018, por la que la Dirección de Asuntos Contractuales, Legislativos y Tributarios del Ministerio de Hacienda hace saber que remitió las actuaciones a esta Cartera *“dado que la emergencia económico, administrativa, Financiera y Cambiaria declarada por la Ley N° 25.561, en cuyo marco el art. 4º del Decreto N° 367/16 preveía la suscripción por el actual Ministerio de Hacienda de los acuerdos integrales de renegociación contractual que se celebren conjuntamente con los ministerios en cuya órbita se encuentran los contratos sujetos a renegociación, Ad Referéndum del PODER EJECUTIVO NACIONAL, no fue prorrogada”*.
2. En el orden 61 obra la Nota N° 2018-21521177-APN-SECLYA#MHA del 8 de mayo de 2018 de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Hacienda, por la que indicó que *“[e]n tanto la renegociación bajo examen exceda el alcance de la conclusión de una renegociación basada en la ley 25.561 se entiende que [esa] cartera carecería de competencia para participar por tratarse de un contrato ajeno a su órbita”*.

## CAPÍTULO II – ANÁLISIS

Habiéndose efectuado la reseña de lo actuado, se reitera que de conformidad con la doctrina según la cual *“las cuestiones de índole técnica son ajenas a la competencia de la Procuración del Tesoro de la Nación, su función asesora se encuentra restringida, en principio, al análisis estrictamente jurídico de las cuestiones sometidas a su opinión”* (Dictámenes: 204:259; 105:120; 125:275; 133:104; 159:246), este órgano de servicio jurídico se abstiene de opinar sobre los aspectos técnicos involucrados en la sustanciación del procedimiento.

De igual modo, este órgano asesor se inhibe de realizar consideraciones sobre cuestiones económicas, de equidad o de mérito, oportunidad o conveniencia, por ser ajenos a su competencia funcional (Dictámenes: 115:224; 159:246; 167:046; 172:036; 204:047; 206:218; 210:11; 213:105; 231:36, 59, 99 y 165; 241:312; 246:559).

Por su parte, se deja constancia de que los criterios de la Procuración del Tesoro de la Nación son vinculantes para este órgano de servicio jurídico de conformidad con el artículo 6° de la Ley del Cuerpo de Abogados del Estado N° 12.954 y los artículos 3° y 4° del Decreto N° 34.952 del 8 de noviembre de 1947.

Finalmente, cabe recordar que la Procuración del Tesoro de la Nación ha manifestado en reiteradas ocasiones que los dictámenes del servicio jurídico no tienen sino la fuerza persuasiva de sus argumentaciones y, en principio, los órganos competentes para resolver pueden, fundadamente y bajo su responsabilidad, apartarse de ellos en aquellos supuestos en los que no compartan el criterio sustentado por este órgano (Dictámenes: 246:593; 250:178 y 261; 251:453; 252:28 y 209; 255:639).

Sentado ello, en relación con el proyecto de acuerdo que se propicia en estos actuados –v. IF2018-12214307-APN-AJ#DNV obrante en el orden 39-, y en atención a la devolución de las presentes actuaciones a esta Cartera ministerial por parte del Ministerio de Hacienda en los términos expuestos, se elevan las mismas en consulta a esa Procuración del Tesoro de la Nación en razón de su función asesora solicitando se expida respecto de diversas cuestiones que hacen a la continuación de su tramitación. Ello, sin perjuicio de la opinión que respecto de cada una de ellas le adelanta este órgano asesor:

**a) si la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria declarada por la Ley N° 25.561 no fue prorrogada más allá del 31 de diciembre de 2017, ¿ello implica que el acuerdo propiciado en las presentes actuaciones no puede formalizarse manteniendo su encuadre jurídico actual?**

Cabe recordar que por la Ley N° 25.561 se declaró con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria hasta el 31 de diciembre de 2004 –v. artículo 1°-.

En efecto, seguidamente por las Leyes Nros. 25.972, 26.077, 26.204, 26.339, 26.456, 26.563, 26.729, 26.896 y 27.200 fue prorrogada sucesivamente la vigencia de la citada emergencia hasta el 31 de diciembre de 2017. Más recientemente, por la Ley N° 27.345 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2019 sólo la emergencia social en los términos de la Ley N° 27.200.

En tal contexto, la Dirección de Asuntos Contractuales, Legislativos y Tributarios del Ministerio de Hacienda, mediante Nota N° NO-2018-17168733-APN-DACLYT#MHA del 18 de abril de 2018, hizo saber que *“las actuaciones fueron remitidas a esa Cartera –siguiendo instrucciones de la superioridad- dado que la emergencia económico, administrativa, financiera y cambiaria declarada por la Ley N° 25.561, en cuyo marco el art. 4° del Decreto N° 367/16 preveía la suscripción por el actual Ministerio de*

*Hacienda de los acuerdos integrales de renegociación contractual que se celebren conjuntamente con los ministerios en cuya órbita se encuentran los contratos sujetos a renegociación, Ad Referéndum del PODER EJECUTIVO NACIONAL, no fue prorrogada”.*

#### **a.i) subsistencia de los antecedentes de hecho y cierre de renegociaciones próximas a su conclusión**

No obstante, cabe reconocerle cierto grado de ultractividad a la autorización al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de Obras y Servicios Públicos conferida por el artículo 9° de la Ley N° 25.561, en virtud de la subsistencia de los antecedentes de hecho y de derecho que dieron causa a dicha autorización y motivaron la renegociación en el presente caso, del interés público comprometido y a fin de no afectar la validez de los actos procedimentales cumplidos tendientes a concluir las largas y complejas renegociaciones contractuales autorizadas por dicha norma. Ello a la luz de la finalidad perseguida por el legislador, estando las mismas muy avanzadas y próximas a concluirse en los términos del procedimiento previsto por el Decreto N° 367/16.

En tal sentido, por el Decreto N° 250/18 se ratificó el Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Licencia de Transporte de Gas Natural, suscripta por el Ministerio de Energía y Minería, el Ministerio de Hacienda y Transportadora de Gas del Sur Sociedad Anónima (en adelante, “TGS”). Conforme surge del propio texto del decreto en cuestión, la firma *ad referendum* entre ambos Ministerios y TGS fue el 30 de marzo de 2017 -es decir, mientras se encontraba vigente la emergencia económica-, pero el Decreto que la ratificó es del 27 de marzo de 2018 y se verifica en el último considerando que la competencia se funda en el artículo 9° de la Ley N° 25.561 -además del artículo 99, inciso 1 de la Constitución y el Decreto N° 367/16-.

Por lo tanto, sería posible argumentar la aplicación de un razonamiento análogo al presente caso, en el entendimiento de que las causas que motivaron la autorización del Congreso a renegociar persistirían respecto del presente caso, habida cuenta de que tales renegociaciones no arribaron aún a un cierre definitivo –lo que tendría lugar recién mediante el perfeccionamiento del acuerdo integral propiciado-.

**ii) si la emergencia social sigue vigente y, en caso afirmativo, si resulta ajustado a Derecho concluir los acuerdos de renegociación iniciados con encuadre en dicha emergencia social, la Ley 25.561 y su normativa complementaria –y, en particular, el Decreto N° 367/2016-.**

#### **a.ii) encuadre en la emergencia social**

Subsidiariamente, corresponde destacar que la emergencia social declarada por la Ley N° 25.561 sigue aún vigente –conforme lo establecido por la Ley N° 27.345-, y este órgano asesor entiende que se podría enmarcar el presente acuerdo en la misma.

Resulta del caso señalar que –conforme surge de su artículo 2°- el objeto de la referida Ley N° 27.345 es el de “*promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles*”, entre otras cuestiones, el transporte.

Atento ello, el Poder Ejecutivo podría adoptar medidas para las que se encontraba facultado en virtud de la Ley N° 25.561, siempre que se puedan enmarcar razonablemente en la emergencia social y se ajusten al objeto de la Ley N° 27.345. En estos términos, se trataría de una competencia actual con origen en la Ley N° 25.561.

Cabe mencionar que las partes en la Cláusula Décima del Contrato originario –aprobado por el Decreto N° 1167/1994- estipulan expresamente que “[l]a Concesión constituye un servicio público”.

Asimismo, se ha dicho que el servicio público *“satisface necesidades indispensables de la población por lo cual debe buscarse el acceso más amplio posible y debe cuidarse que no se desnaturalice ese acceso”* (Mairal Héctor, “El concepto de Servicio Público en el Derecho Argentino Actual”)

Es que no se puede soslayar que la prestación de un servicio público satisface una necesidad imprescindible de la sociedad. Así, este servicio jurídico entiende que puede considerarse a los servicios públicos relacionados con el transporte como alcanzados por la emergencia social vigente y, por consiguiente, se desprendería de aquello la posibilidad de encuadrar a la renegociación en estudio en las normas de emergencia, lo que traería aparejado la continuación del trámite actual con la aplicación de las pautas establecidas por el Decreto N° 367/2016.

**b) Asumiendo que el acuerdo propiciado en las presentes actuaciones no pueda formalizarse manteniendo su encuadre jurídico en la Ley N° 25.561, ¿puede pasar a encuadrarse en los términos de la Ley N° 17.520?**

En relación a esta cuestión, se señala que por la Ley N° 17.520 se estableció que el Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de obra pública por un término fijo, a sociedades privadas o mixtas o a entes públicos para la construcción, conservación o explotación de obras públicas mediante el cobro de tarifas o peaje conforme a los procedimientos que fija dicha ley, estableciéndose también que la concesión se hará por decreto del Poder Ejecutivo.

Asimismo, esa Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho que la potestad del Poder Ejecutivo de negociar y celebrar contratos administrativos *“exige admitir igualmente la facultad (...) para renegociar los contratos que está autorizado a celebrar, agregando que “teniendo en cuenta la potestad de la Administración de rescindir los contratos, debe reconocérsele también la atribución menor a aquella de proceder a su renegociación”* (Dictamen 246:64).

En este sentido, dicho Organismo Asesor ha entendido que más allá de las previsiones contenidas en una ley de emergencia, la facultad renegociadora debe entenderse anterior a las previsiones de tal ley, por lo que sin perjuicio de la pérdida de vigencia de dicha emergencia, continuaría en la órbita de las facultades del Poder Ejecutivo (Dictamen PTN N° 163/94).

Asimismo, la doctrina señala que puede proceder una reestructuración consensuada del contrato proveniente de hechos de la Administración o actos del poder público que modifican sustancialmente las condiciones de contratación, con el objeto de compensar las consecuencias de las regulaciones emitidas por la Administración durante la marcha del contrato y que afectan su ecuación económico-financiera y obligacional (Druetta, Ricardo; “Renegociación del contrato administrativo”).

Al respecto, debe tenerse en cuenta que tanto de los diversos informes técnicos agregados al expediente como de los considerandos del proyecto de Acuerdo Integral surge que el artículo 8° de la Ley N° 25.561 - que dejó sin efecto las cláusulas que establecían el valor de la tarifa básica en dólares y su actualización- habría generado un desequilibrio a los concesionarios y que, hasta el momento, no se les habría recompuesto la ecuación económico-financiera original prevista en los Contratos de Concesión.

En cuanto a la ecuación económico-financiera, se ha dicho que *“los principios de legalidad e igualdad de los licitantes impedirán que se acuerden o modifiquen términos del contrato que resulten más ventajosos para el adjudicatario, pero por otra parte, el contratista del Estado no podría verse forzado a vincularse en condiciones más desfavorables, o inferiores a la propuesta oportunamente fijada en el pliego (...) y en la oferta que resultó adjudicataria”* (Rennella, María Paula, “Cuestiones de Contratos Administrativos”).

En consecuencia, dadas las circunstancias reseñadas en el expediente, de proceder una renegociación a fin de recomponer la ecuación económica-financiera del contrato, no se estarían alterando tales condiciones

sino que, por el contrario, se estarían reestableciendo las previstas inicialmente en los pliegos y en la oferta que resultó ganadora.

Como antecedente relevante, cabe tener presente el Decreto N° 1221/00, por el que se aprobó una adecuación del contrato de concesión de la concesionaria Autopistas del Sol S.A., en la cual, entre otras medidas, se amplió el plazo de la concesión hasta el 31 de diciembre de 2020. Dicho decreto se dictó en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 17.520, la Ley N° 13.064 y el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.

En relación a dichas facultades, la doctrina ha entendido que “[e]s claro que la potestad del órgano máximo del Poder Ejecutivo de celebrar y negociar contratos, proviene de las atribuciones conferidas por el Art. 99 inciso 1° de la Constitución Nacional, en su condición de jefe supremo de la Nación, jefe de Gobierno y responsable político de la administración general del país” (Druetta, Ricardo; “Renegociación del contrato administrativo”).

Ahora bien, por el Decreto N° 1167 del 15 de julio de 1994 se otorgaron las Concesiones de Obra Pública gratuita para la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación por el régimen de la Ley N° 17.520 y de la Ley N° 23.696 de los Accesos Norte, Oeste y Ricchieri (art. 2°, Dec. N° 1167/94).

En dicha oportunidad, además, se facultó al entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a efectuar las modificaciones que demanden los Contratos de Concesión que se aprobaron por dicho decreto, aclarando que tales modificaciones deberán ser congruentes con los documentos que rigieron el Concurso (art. 6°, Dec. N° 1167/94), sin perjuicio de que según el antecedente reseñado le correspondería al Poder Ejecutivo nacional.

Por lo expuesto, este órgano asesor entiende que el acuerdo que se propicia en las presentes actuaciones podría pasar a encuadrarse en los términos de la Ley N° 17.520.

En tal supuesto, si bien este servicio jurídico estima que no resultaría aplicable en forma directa el procedimiento previsto en el Decreto N° 367/16 –ya que el mismo fue establecido “[a] los efectos de concluir los procesos de renegociación de los contratos de Obras y Servicios Públicos dispuestos por el Artículo 9° de la Ley N° 25.561” (cfr. art. 2, Dec. N° 367/16)-, nada obstaría a que se aplique un procedimiento de tramitación y control análogo al establecido por dicha norma y con todas las intervenciones allí previstas, de considerarse conveniente.

**b.i) Si algún punto del acuerdo propiciado excediera el encuadre estricto de la Ley N° 17.520, ¿podría entenderse su naturaleza jurídica como un "acuerdo transaccional"? (Ley N° 17.516; Dec. N° 411/80 –t.o. 1987-). En caso afirmativo, ¿corresponde aplicar el trámite transaccional previsto por el artículo 32 del Decreto N° 2140/91, reglamentario de la Ley N° 23.982 de Consolidación de Deuda Pública?**

En otro orden de ideas, cabe consultar a la Procuración del Tesoro de la Nación si el Acuerdo de marras encuadra dentro de las previsiones del Decreto N° 411/80 que reglamenta el Régimen de Representación Judicial del Estado de la Ley N° 17.516.

Conforme señala la doctrina, hay situaciones donde la modificación contractual por mutuo acuerdo posee naturaleza transaccional (Druetta, Ricardo Tomás; “Renegociación del Contrato Administrativo”).

Así, la índole transaccional de una renegociación le fue reconocida por esa Procuración del Tesoro de la Nación a un acuerdo formalizado entre contratista y comitente por el que se había pactado la modificación del régimen contractual de variaciones de costos por aplicación de coeficientes correctores, la extensión del término establecido para la conclusión de la obra, un nuevo régimen de penalidades para los atrasos que se produjeran en el nuevo plan de inversiones y la renuncia del contratista a reclamar gastos improductivos

que eventualmente pudieran corresponderle por la modificación de los plazos originales, conceptuándolo como “*un acto jurídico bilateral cuyo objeto es la renegociación del contrato en forma completa y global y de naturaleza transaccional, por el que las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas*” (Dictamen N° 126/95, 3 de agosto de 1995; Dictámenes 214:149, Rev. P.T.N., julio-diciembre 1995, No 24, p. 11 y ss).

En cuanto a los requisitos para afirmar que estamos ante tal especie de acuerdo cabe remitirse al Código Civil y Comercial de la Nación por vía analógica. Al respecto, su artículo 1641 establece que “[l]a transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas”, es decir, que para estar frente a un Acuerdo Transaccional hace falta cumplir con al menos tres requisitos, a saber: i) acuerdo de voluntades para evitar un litigio o ponerle fin; ii) concesiones recíprocas; y iii) extinguir obligaciones litigiosas o dudosas.

En este sentido, tal como dice la doctrina, “[e]xiste una correspondencia entre la extinción de obligaciones dudosas o litigiosas y la finalidad del contrato de transacción de evitar un pleito o ponerle fin. El objetivo es, en definitiva, declarar certeza y despejar la incertidumbre que presentan derechos contestados (Carestia, Federico S.: “La transacción en el Código Civil y Comercial”, La Ley, RCCyC 2016 (abril), pag. 165)

La incertidumbre puede ser objetiva o subjetiva, siendo la primera cuando una cuestión es materia de litigio ya que todo proceso engloba, en sí mismo, un margen de inseguridad en cuanto a legitimidad del crédito, su exigibilidad, la dificultad de probar su título, el monto de los daños sufridos.

En este sentido, cabe mencionar que en el artículo décimo quinto del acuerdo donde se regula la renuncia de acciones del concesionario y sus accionistas se encuentran detalladas en el Anexo XVII-A y XVII-B. En efecto, en el último anexo citado se menciona que el concesionario se obliga a obtener de Abertis Infraestructuras SA el desistimiento del Procedimiento N° ARB/15/48, presentado ante el CIADI.

Sobre el punto cabe mencionar que, si bien no se está ante la presencia de un procedimiento judicial propiamente dicho, el proceso arbitral iniciado ante el CIADI es de suficiente entidad para configurar el margen de inseguridad precedentemente descrito, en la relación jurídica que vincula a las partes.

Por otro lado, se exige que las partes se hagan concesiones recíprocas, es decir, que cada uno de los sujetos sacrifique en alguna medida sus pretensiones iniciales, a cambio de que se le asegure el carácter definitivo de las restantes o su cumplimiento inmediato o a breve plazo.

Cabe aclarar que la doctrina tiene dicho que “*no hace falta que las concesiones de cada uno y las ventajas obtenidas a cambio sean equivalentes o de igual valor*” (Carestía, Federico S. “La transacción en el Código Civil y Comercial”, La Ley, RCCyC 2016 (abril), pag. 165).

Sobre tal punto, y a fines enunciativos, cabe destacar que las partes, en los antecedentes del acuerdo, estipulan que lo suscriben “*a los fines de posibilitar una solución amigable*” y por tal razón el concesionario “*limita sus pretensiones a la recuperación de lo invertido y no amortizado, cuyo valor, además, ha aceptado (...) reducir*” y que el concesionario se obliga a “*desistir y/o a no iniciar cualquier tipo de procedimiento, reclamo o demanda contra el Concedente*” -artículo 15º-, entre otras medidas. Por otro lado, el Concedente extiende el plazo de la concesión -artículo 3º- para recomponer la ecuación económico-financiera y se “*libera de responsabilidad al Concesionario por los incumplimientos invocados relacionados con obligaciones de inversión*”, entre otras cuestiones a considerar.

Por todo lo expuesto, este servicio jurídico entiende que si algún punto del acuerdo propiciado excediera el encuadre estricto de la Ley N° 17.520, no habría óbice legal a considerar la naturaleza jurídica del acuerdo como “transaccional” en los términos de la Ley N° 17.516 y su reglamentación por Decreto N° 411/80 (t.o. 1987) –ya sea en forma total, o parcial en lo que exceda el marco de la Ley N° 17.520-.

En tal sentido, cabe poner de resalto que, en su artículo 1°, el Decreto N° 411/80 establece que “[c]uando la importancia del asunto o sus consecuencias justifiquen la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, las autoridades y órganos mencionados (...) podrán requerir que se los autorice por decreto” y que “[e]n todos los casos el Poder Ejecutivo Nacional podrá avocarse en la competencia delegada por este artículo”.

Sentado lo expuesto, cabe analizar si dada la naturaleza transaccional desarrollada en el punto anterior, resultaría aplicable al presente caso el trámite transaccional previsto por el artículo 32 del Decreto N° 2140/91, reglamentario de la Ley N° 23.982 de Consolidación de Deuda Pública.

Al respecto, por el artículo 13 de la Ley N° 25.344 se consolidó “en el Estado Nacional, con los alcances y en la forma dispuesta por la Ley N° 23.982 las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de marzo de 1991 y anterior al 1° de enero de 2000, y las obligaciones previsionales originadas en el régimen general vencidas o de causa o título posterior al 31 de agosto de 1992 y anterior al 1° de enero de 2000 que consistan en el pago de sumas de dinero, o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero, y que se correspondan con cualquiera de los casos de deuda consolidada previstos en el artículo 1° y se trate de obligaciones de los entes incluidos en el artículo 2°, ambos de la Ley N° 23.982”.

Por otro lado, el artículo 1° de la Ley N° 23.982 estableció que la consolidación resultaba procedente cuando, entre otros supuestos, “medie o hubiese mediado controversia reclamada judicial o administrativa conforme a leyes vigentes acerca de los hechos o el derecho aplicable (inc. a)”, o bien, “[c]uando el crédito sea o haya sido reconocido por pronunciamiento judicial aunque no hubiere existido controversia o ésta cesare o hubiere cesado por un acto administrativo firme, un laudo arbitral o una transacción (inc. c)”.

Dicha ley se encuentra reglamentada por el Decreto N° 2140/91, estableciendo su artículo 32 el trámite al que se ajustarán las transacciones en el marco de la misma.

Ahora bien, la Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido que, aun cuando los compromisos que se formalicen se encontrasen alcanzados por alguna consolidación, “el procedimiento transaccional previsto en los artículos 18 de la Ley N° 23.982 y 32 de su Decreto reglamentario N° 2140/91 no es de aplicación obligatoria, sino sólo facultativa para el titular del crédito quien, para perseguir el cobro de sus acreencias, puede acudir a aquél o al procedimiento administrativo o judicial que considere oportuno. Por ese motivo, la transacción reglada por el artículo 18 de la Ley N° 23.982 no constituye un trámite excluyente de los que la ley habilita para reclamar lo que en derecho corresponde” (Dictámenes 242:554). En línea con ello, este órgano de servicio jurídico estima que no resulta aplicable al caso el procedimiento transaccional reglado por el artículo 32 del Decreto N° 2140/91, ya que –independientemente de si los compromisos incluidos en el acuerdo fuesen alcanzados por una consolidación- no surge de las actuaciones que la empresa concesionaria haya optado por seguir dicho trámite.

A mayor abundamiento, cabe destacar que como consecuencia del Acuerdo de Renegociación Contractual celebrado el 16 de diciembre de 2005 -ratificado por el Decreto N° 296/2006-, las obligaciones nacidas al amparo del contrato originario han quedado novadas por las del referido Acuerdo.

En este orden de ideas, dadas las modificaciones que se realizaron al Plan de Inversiones, la modificación de la moneda de cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR), entre otras, este órgano jurídico entiende que se ha producido tal incompatibilidad entre las obligaciones establecidas en el contrato de concesión primigenio y las emanadas del Acuerdo de Renegociación, por lo que cabe entender por extinguidas las primeras como consecuencia de su reemplazo por las segundas. Por lo tanto, el título de dichas obligaciones es posterior a la fecha de corte consignada en la norma, quedando por fuera del marco normativo de la Ley N° 25.344.

En función de lo expuesto, este órgano asesor opina que no resultaría aplicable al presente caso el trámite transaccional previsto por el artículo 32 del Decreto N° 2140/91, reglamentario de la Ley N° 23.982 de Consolidación de Deuda Pública.

### **b.ii) ¿Es procedente la prórroga de jurisdicción que contiene el acuerdo propiciado?**

Respecto del artículo décimo sexto del acuerdo propiciado -relativo a la cláusula arbitral-, esa Procuración del Tesoro de la Nación señaló que *“lo pactado – dada su aparente extensión para la resolución de todo conflicto contractual y/o regulatorio entre las partes podría exceder los límites de la razonabilidad que debe presidirlo si se considerase que con ello vacía las facultades o herramientas del regulador; aun cuando pueda resultar afín a la solución jurisdiccional prevista en el régimen dispuesto por recientemente por la Ley N.º 27.328”*.

Al respecto, cabe destacar que la cláusula 23 del Contrato estableció la competencia de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Capital Federal para dirimir todas las cuestiones y conflictos emergentes del mismo. Tal como se previó originalmente, sólo los conflictos no derivados del Poder de Policía que se susciten entre las partes pueden ser resueltos por vía arbitral, según las reglas allí establecidas.

Por ende, someter a arbitraje todas las controversias, incluidas las derivadas de sanciones que se impongan al concesionario, implicaría una renuncia a facultades que debiera ejercer el Estado.

Ahora bien, por el artículo 19.5 del proyecto de acuerdo permitiría que toda disputa o controversia entre las Partes relativa a sus derechos, será sometida –a elección del concesionario- al mecanismo de resolución de disputas establecido en el artículo 16, o a arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y que *“el CONCESIONARIO, al estar sometido a control extranjero, será tratado como tal a los fines del Convenio CIADI. Asimismo, las PARTES reconocen que el presente ACUERDO INTEGRAL es una inversión a los fines del Convenio CIADI”*.

En este sentido, cabe destacar que si bien mediante el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y el Reino de España -aprobado por la Ley N° 24.418- se habilitó el arbitraje como método de solución de controversias entre una parte e inversores de la otra, y sin perjuicio de las reglas de admisibilidad del CIADI, esta cláusula podría ser interpretada como un derecho del Concesionario a someter cuestiones a dicho tribunal arbitral sin habilitación legal, en el eventual caso que sus accionistas pertenecieran a un Estado que no haya aprobado un tratado bilateral de protección de inversiones con la República Argentina.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que *“no existe obstáculo constitucional alguno para que el Estado Nacional someta a jurisdicción arbitral sus controversias con particulares, siempre que exista una ley que así lo establezca”*, y que *“esa previsión normativa expresa encuentra sustento en la Constitución Nacional, en la que se establece en los casos de competencia federal por razón de la materia que la Nación, en principio, sólo puede ser llevada ante sus propios tribunales (art. 116). Por ello, toda excepción a dicha regla debe hallarse claramente establecida ya que la jurisdicción arbitral es de interpretación restrictiva en razón de la excepcional competencia que le es confiada y que le permite conocer en cuestiones que, en el orden normal de las instituciones, les correspondería decidir a los jueces (arg. Fallos: 290:237). En virtud de este carácter extraordinario es que no cabe hacer extensiva la jurisdicción arbitral a aspectos que no se encuentren contemplados en las normas que habilitan su intervención (Fallos: 133:61)”* (CSJN, “Techint Compañía Técnica Internacional SACE s I c/ Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas en liquidación y Nucleoeléctrica Argentina S.A.”, 8 de mayo de 2007).

### **b.iii) ¿Qué autoridad podría suscribir el acuerdo propiciado?**

Conforme lo analizado precedentemente, mediante el Decreto N° 1167/94 se facultó al entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a efectuar las modificaciones que demanden los Contratos de



Concesión que se aprobaron por dicho decreto, aclarando que tales modificaciones deberán ser congruentes con los documentos que rigieron el Concurso (art. 6°, Dec. N° 1167/94).

Ahora bien, en el presente caso, en razón de las modificaciones sustanciales involucradas en el acuerdo proyectado con respecto a los documentos que rigieron el Concurso, cabría sostener que la autoridad competente para aprobar las adecuaciones del contrato de concesión es el Presidente de la Nación, toda vez que se excedería la atribución de facultades del Decreto N° 1167/1994.

En línea con ello, cabe recordar que en el antecedente reseñado, en el año 2000 la aprobación de la adecuación del contrato de concesión de Autopistas del Sol S.A. fue realizada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto N° 1221/00.

Por otro lado, si algún punto del acuerdo propiciado excediera el encuadre estricto de la Ley N° 17.520, este órgano asesor estima que no habría óbice legal a considerar la naturaleza jurídica del acuerdo como “transaccional” en los términos de la Ley N° 17.516 y su reglamentación por Decreto N° 411/80 (t.o. 1987) –ya sea en forma total, o parcial en lo que exceda el marco de la Ley N° 17.520-.

Consecuentemente, en línea con el razonamiento antes expuesto y sin perjuicio de lo observado oportunamente por la Oficina Anticorrupción, el Presidente de la Nación, en ejercicio de las facultades que le son propias, es la autoridad competente para suscribir el acuerdo propiciado.

**b.iv) De modificarse el encuadre jurídico del acuerdo propiciado, ¿resultan igualmente pertinentes y/o conducentes las observaciones ya formuladas al mismo por los áreas intervinientes?**

En relación a la presente cuestión, cabe referirse a las observaciones efectuadas por la Procuración del Tesoro de la Nación, en oportunidad de su Dictamen Jurídico N° IF-2017-34134193-APN-PTN del 21 de diciembre de 2017 -orden 4-, por la Sindicatura General de la Nación (en adelante, la “SIGEN”), que surgen del Informe firma conjunta N° IF-2018-05661294-APN-GAJ#SIGEN del 2 de febrero de 2018 -orden 15- y por la Oficina Anticorrupción en oportunidad de su intervención en el Informe N° IF-2017-24843254-APN-OA#MJ del 20 de octubre de 2017 –orden 5-.

En tal sentido, resulta del caso analizar el cumplimiento de las observaciones por parte de la Dirección Nacional de Vialidad (en adelante, la “DNV”), en su carácter continuador de las competencias del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) –v. IF-2018-12265276-APN-AJ#DNV obrante al orden 40-.

En primer lugar, la Procuración del Tesoro –en la intervención antes señalada- sugirió modificar el término “INVERSIÓN RECONOCIDA” empleado en el acuerdo en estudio, a los fines de “evitar referirse a un término que podría llamar a equívocos en el marco de procedimientos arbitrales o judiciales”, pudiendo verificarse que en el proyecto de Acuerdo Integral se eliminaron las referencias a la “INVERSIÓN RECONOCIDA” y en su lugar se utiliza la expresión “INVERSIÓN BRUTA”.

Por otro lado, la Procuración del Tesoro y la SIGEN coincidieron en la necesidad de que se acompañe un informe técnico integral a los fines de ponderar adecuadamente el acuerdo integral. En palabras del citado Organismo Asesor “*el presente asesoramiento,(...) se efectúa sin que haya sido incorporado a las actuaciones un informe técnico integral y exhaustivo con el correspondiente respaldo documental que valide la afirmación que se viene a reseñar, en el sentido de que el reconocimiento del monto determinado como Inversión Reconocida resulta razonable en el contexto de renegociación descripta*”, mientras que la SIGEN manifestó que debía “*glosarse por parte de la Autoridad de Aplicación un Informe Final, documento técnico integrador de las distintas intervenciones, dictámenes y estudios realizados, suscripto por los distintos responsables con conclusiones explícitas y la información necesaria que permite ponderar adecuadamente el Acuerdo Integral*”.

A los fines de cumplimentar tal extremo, la DNV acompañó el Informe Evaluativo del Acuerdo Integral de

Renegociación Contractual del Acceso Norte elaborado por el Administrador General de dicha Dirección Nacional –v. IF-2018-12649081-APN-DNV#MTR en el orden 43-.

Por otro lado, la Procuración del Tesoro entendió que debían excluirse las definiciones que impliquen asunción de responsabilidad, señalando que *“debería excluir[se] de su texto aquellas definiciones que impliquen la asunción de responsabilidad por parte del Estado Nacional, o aclarar expresamente que se lo realiza sin reconocer hechos y derechos y a los fines transaccionales, sin que ante su eventual frustración, pueda utilizárselo en el marco de los arbitrajes vigentes instados por los accionistas de AUSOL, o en el marco del reclamo administrativo previo entablado por AUSOL, o por cualquier otro concesionario o accionista que hubiere entablado una acción o reclamo contra el Estado Nacional”*.

Sobre esta cuestión, cabe poner de resalto que este servicio jurídico advierte que tales aclaraciones no han sido incorporadas al proyecto de Acuerdo Integral, sino que, en su lugar, se aclaró en la Tercera Acta Complementaria sobre Modificaciones al Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Norte que *“el ACUERDO INTEGRAL se realiza sin reconocer hechos y derechos a los fines transaccionales, sin que, ante la eventual falta de aprobación del ACUERDO INTEGRAL, éste pueda ser invocado en el marco de procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales, en trámite o que se promuevan en el futuro entre el CONCEDENTE o la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y el CONCESIONARIO o accionistas del CONCESIONARIO”* –v. cláusula segunda-.

No obstante dicha cláusula, y habida cuenta de las implicancias señaladas por la Procuración del Tesoro de la Nación, este servicio jurídico pone a consideración de dicho Organismo Asesor si tal previsión debe ser incorporada al texto del acuerdo de renegociación contractual, o si con la Tercera Acta Complementaria es suficiente.

En otro orden de ideas, la Procuración del Tesoro efectuó una recomendación formal, en el entendimiento de que, en el artículo 3, deberían aclararse las referencias a las cláusulas del Acuerdo Integral. Al respecto, se advierte que no se ha dado cumplimiento a dicho extremo, sin perjuicio de lo cual este servicio jurídico opina que su omisión no obsta al entendimiento del articulado, toda vez que sin dichas precisiones es posible dilucidar que el artículo refiere a cláusulas del propio Acuerdo Integral.

Por otro lado, respecto de los cuadros tarifarios determinados por el artículo 4 del acuerdo integral, la Procuración del Tesoro de la Nación entendió que *“[u]na instancia de debate público debiera aplicar también al derecho del concesionario a una Redeterminación Tarifaria anual, que refleje la incidencia de la variación de los factores determinados en el Anexo XII en el Plan Económico Financiero y en la Tasa Interna de Retorno”* (sic). En tal sentido, planteó *“que la audiencia pública en la cual se debata la presente metodología de fijación tarifaria, tenga efectos por los próximos 13 años, y que a cada ajuste tarifario anual que se realice conforme a ella, lo preceda un procedimiento de publicidad previa”*.

Asimismo, puso de resalto que *“[n]o se brinda una explicación para la diferencia de tratamiento entre usuarios con TelePASE y los demás casos”* y propuso “parámetros novedosos” para incorporar respecto del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y la Ley N° 27.328.

En relación a las precitadas observaciones, se advierte que la DNV modificó el artículo 4.6 a fin de incorporar la participación ciudadana en el trámite de Redeterminación Tarifaria Anual, incluyendo la previsión de que la Autoridad de Aplicación deba llevar adelante un procedimiento previo que contemple la participación ciudadana, habilitando un espacio institucional para la expresión de opiniones y propuestas por parte de los interesados y, en ese sentido, se incluyó el procedimiento a seguir para llevar a cabo dicho extremo. Asimismo, se plasmó que las opiniones y propuestas que se presenten durante ese procedimiento no tendrán carácter vinculante y se estableció un plazo en el cual la Autoridad de Aplicación debe expedirse sobre las opiniones y propuestas, vencido lo cual, sin que se haya expedido el concesionario, podrá aplicar los cuadros tarifarios resultantes de la redeterminación tarifaria que fue sometida a la consulta pública.

Por otro lado, no se realizaron aclaraciones respecto del TelePASE, así como tampoco se incluyeron los parámetros novedosos propuestos por la Procuración del Tesoro.

Más allá de lo expuesto, resulta del caso referirse a la Audiencia Pública realizada con motivo de las previsiones del artículo 5° del Decreto N° 367/2016, habida cuenta de la Resolución N° 657 del 12 de abril de 2018 de la Dirección Nacional de Vialidad por la que se aprobó el Informe Final de la Audiencia Pública del Acceso Norte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –v. IF2018-15713273-APN-PYC#DNV-.

Al respecto, y sin perjuicio de lo establecido por el Decreto N° 1172/2003, este servicio jurídico recomienda que la DNV explique en las presentes actuaciones de qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía con relación al acuerdo propiciado y, en su caso, las razones por las cuales las rechaza.

En otro orden de ideas, la Procuración del Tesoro se refirió al artículo 15 del Acuerdo Integral proyectado, manifestando que *“[l]a ejecución del desistimiento [por parte del concesionario] se condiciona a la entrada en vigencia del Acuerdo y procederá dentro de los 10 días hábiles, respecto de los reclamos y recursos que tramitan en sede administrativa. En cuanto a las acciones judiciales, la renuncia se debe presentar dentro de los 10 días desde que se consiga la aceptación por parte de los abogados (letrados y apoderados) del Estado Nacional y que las costas se impondrán por el orden causado. El Estado Nacional asume sobre el particular una indemnidad, ante la imposibilidad de obtener la señalada conformidad. Respecto de este último supuesto, no se precisa expresamente que su otorgamiento implicará el cumplimiento de la condición a la cual se sujeta el desistimiento”*.

Al respecto, este servicio jurídico advierte que no se ha dado cumplimiento a dicha observación. Sin perjuicio de ello, del texto de la cláusula 15.2.ii surgiría que, en el supuesto de la imposibilidad que allí se prevé, la obligación subsidiaria sería la de mantener indemne al concesionario.

Por otro lado, la SIGEN, respecto de las causas sujetas a desistimiento, indicó que en los artículos 15.1 y 15.3 *“se aprecia[ba] necesario incorporar información respecto de la totalidad de causas iniciadas por el Concesionario y sus accionistas con origen en el contrato de concesión, ello a fin de asegurar el cumplimiento de los desistimientos a los que se obligan.”*

Con respecto a este punto, se advierte que fueron agregados los Anexos XVII-A y XVII-B, y que en la Cláusula 15.1 el concesionario declara y garantiza que constituyen la totalidad de los reclamos promovidos por el concesionario y sus accionistas mayoritarios existentes a la fecha de la firma.

Asimismo, la Procuración del Tesoro, respecto del artículo 15.4, señaló que *“[d]esde el punto de vista formal, (...) merecería una mínima precisión para evitar eventuales equívocos respecto de si la obligación a la cual se sujeta dicho plazo sería la de presentar los documentos que acrediten el compromiso de los accionistas, o si en ese plazo, los accionistas principales deben ejecutar los compromisos asumidos”*.

*“Asimismo, y también formal, [observó] que la entrada en vigencia del Acuerdo Integral se condiciona a que se hayan presentado los compromisos de los Accionistas Principales mencionados en la cláusula 15.3. Ahora bien, la acreditación de que efectivamente ocurrió el hito del 15.3 se regula bajo el artículo 15.4 (a), por lo cual podría incorporarse una referencia a este último en la norma que regula la entrada en vigencia [artículo 18]”*.

En cuanto a dichas observaciones formales, no se observan modificaciones en la redacción del artículo 15.4; mientras que, por su parte, sí se verifican modificaciones en el artículo 18. Puntualmente, donde decía *“[s]e hayan presentado los compromisos de los ACCIONISTAS PRINCIPALES mencionados en la Cláusula 15.3”*, ahora se lee *“[s]e hayan presentado los compromisos de los Accionistas Principales mencionados en la Cláusula 15.3 y 15.4 (a)”* (sic).

En otro orden de ideas, la Procuración del Tesoro se expidió respecto del artículo 15.6 del Acuerdo Integral, indicando que *“el objetivo de incorporar un incentivo al cumplimiento, de la manera en la cual se lo está regulando aquí, podría juzgarse desproporcionado o alejado del carácter transaccional que ha marcado el*

*proceso de renegociación que se está llevando a cabo. En ese sentido, y sin que este comentario implique validación alguna del quantum propuesto, se sugiere realizar un esfuerzo de negociación adicional con el objetivo de suprimir la cláusula 15.6, modificándola por una garantía distinta para el cumplimiento del Acuerdo Integral y/o el respeto por el Acuerdo Integral económico que transaccionalmente allí se pacta, es decir, un pago de USD 499.000.000 (cuatrocientos noventa y nueve millones de dólares estadounidenses) al 8% anual, en un plazo de 13 años”.*

Agregó, además, que cabía observarse *“que el condicionamiento incorporado, por su extensión, desnaturaliza el carácter novatorio y definitivo de la renegociación alcanzada, así como de las renunciaciones y desistimientos regulados. Como una demostración de lo expuesto, téngase presente que no se modula el momento en que dicho hito pueda ocurrir, ya sea en el primer año o en el decimotercero, ni se regula un procedimiento de intimación previo a la subsanación, ni se incorporan precisiones sobre la entidad que debe tener la afectación, modificación y/o alteración de un contrato pensado para extenderse por 13 años”.*

Asimismo, la SIGEN manifestó que *“debería limitarse, con alguna pauta temporal o material, la facultad del concesionario de dar por terminado ‘en cualquier momento’ el Acuerdo Integral en el caso que una decisión o acto de cualquiera de los poderes u órganos del Estado ‘modifique o altere’ dicho acuerdo, por cuanto la amplitud de la atribución podría desvirtuar el espíritu y la naturaleza del acuerdo”.*

Particularmente, sólo se advierte el cambio de redacción del artículo 15.6 del Acuerdo Integral. Para mejor proveer, se transcriben a continuación ambas redacciones.

La versión anterior del artículo 15.6 decía *“en caso de que tal decisión o acto recaiga luego de haber entrado en vigor el presente ACUERDO INTEGRAL, y su vigencia y/o aplicación, total o parcial, se vea afectada, el concesionario podrá, en cualquier momento, y mientras esa situación se mantenga, dar por terminado el presente ACUERDO INTEGRAL”.* Mientras que en la actual dice *“en caso de que tal decisión o acto recaiga luego de haber entrado en vigor el presente ACUERDO INTEGRAL, y su vigencia y/o validez se vea afectada, el CONCESIONARIO podrá, en cualquier momento, y mientras esa situación se mantenga, dar por terminado el presente ACUERDO INTEGRAL”.*

Con respecto a este punto, en un considerando de la Tercera Acta Complementaria sobre Modificaciones al Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión se expresa que esta nueva redacción *“preserva el carácter novatorio del ACUERDO INTEGRAL, y el efecto definitivo de las renunciaciones y desistimientos allí regulados, en tanto y en cuanto no se vea afectada la vigencia o validez de dicho ACUERDO INTEGRAL”.*

Este órgano asesor pone a consideración de la Procuración del Tesoro de la Nación si con la modificación efectuada estarían cumplidas sus observaciones y las de la SIGEN.

Respecto del artículo décimo sexto del acuerdo propiciado –relativo a la cláusula arbitral–, cabe reiterar que esa Procuración del Tesoro de la Nación señaló que *“lo pactado – dada su aparente extensión para la resolución de todo conflicto contractual y/o regulatorio entre las partes podría exceder los límites de la razonabilidad que debe presidirlo si se considerase que con ello vacía las facultades o herramientas del regulador; aun cuando pueda resultar afín a la solución jurisdiccional prevista en el régimen dispuesto por recientemente por la Ley N.º 27.328”.*

Al respecto, cabe destacar que la cláusula 23 del Contrato estableció la competencia de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Capital Federal para dirimir todas las cuestiones y conflictos emergentes del mismo. Tal como se previó originalmente, sólo los conflictos no derivados del Poder de Policía que se susciten entre las partes pueden ser resueltos por vía arbitral, según las reglas allí establecidas.

En otro orden de ideas, la Procuración del Tesoro consideró necesaria la intervención del Ministerio de Hacienda, indicando que *“las actuaciones deberán contar con el asesoramiento jurídico del Ministerio de*

*Transporte, recaudo éste necesario –normalmente– con carácter previo a mi intervención, por tratarse en la especie de una cuestión vinculada al ejercicio de competencias de organismos descentralizados de su ámbito (D.N.V. y OCCOVI) (...) y también con el correspondiente al Ministerio de Hacienda (art. 4.º del Decreto N.º 367/16)”.*

En igual sentido, la SIGEN indicó que *“resta incorporar al expediente la intervención del Ministerio de Hacienda, con los informes técnico-económicos y dictámenes jurídicos propios de las dependencias de la cartera con incumbencias en la materia”.*

Respecto de dicha intervención, este servicio jurídico advierte que el Ministerio de Hacienda no ha tomado la intervención solicitada, puesto que sólo se ha limitado a remitir el expediente a este Ministerio de Transporte.

No obstante las intervenciones requeridas en el marco del Decreto N° 367/2016, ante un eventual cambio de encuadre jurídico del acuerdo propiciado en las presentes actuaciones, si bien este servicio jurídico estima que no resultaría aplicable en forma directa el procedimiento previsto en el Decreto N° 367/16 –ya que el mismo fue establecido *“[a] los efectos de concluir los procesos de renegociación de los contratos de Obras y Servicios Públicos dispuestos por el Artículo 9º de la Ley N° 25.561”* (cfr. art. 2, Dec. N° 367/16)-, nada obstaría a que se aplique un procedimiento de tramitación y control análogo al establecido por dicha norma y con todas las intervenciones allí previstas, de considerarse conveniente.

Por otra parte, téngase presente que por el Decreto N° 2 del 2 de enero de 2017 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520, creándose el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Finanzas –en lugar del entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas-, estableciendo que compete al Ministerio de Hacienda *“[p]articipar en las negociaciones y modificaciones de los contratos de obras y servicios públicos”* –v. inciso 12-.

En tal contexto, si bien dicha Cartera ministerial no sería el responsable primario, este servicio jurídico entiende que el Ministerio de Hacienda debería tomar parte del asunto de conformidad con la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación (Dictámenes 240:184), y expedirse con respecto del acuerdo bajo análisis.

Finalmente, cabe tener presente lo observado por la Oficina Anticorrupción en oportunidad de su intervención obrante en el orden 5 –v. IF-2017-24843254-APN-OA#MJ- en sentido de que el *“Ing. Mauricio Macri deberá abstenerse de tomar intervención en la firma Ad Referendum del contrato de renegociación que tramita por el expediente de referencia, en cumplimiento del artículo 4º inciso d) del Decreto 202/17”.*

En este sentido, el artículo citado establece que *“[e]l funcionario con competencia para resolver y respecto del cual se hubiera declarado alguno de los vínculos precedentemente señalados, deberá abstenerse de continuar interviniendo en el referido procedimiento, el que quedará a cargo del funcionario al que le correspondiera legalmente actuar en caso de excusación”.*

Por lo expuesto, este servicio jurídico entiende que, indistintamente del encuadre jurídico que se le dé al acuerdo propiciado, igualmente resulta pertinente la observación de la Oficina Anticorrupción.

### CAPÍTULO III - CONCLUSIÓN

En los términos expuestos, se elevan las presentes consultas a esa Procuración del Tesoro de la Nación a fin de que se expida a su respecto.

Con lo dictaminado, remítanse las actuaciones a la Procuración del Tesoro de la Nación, para la prosecución del trámite.

